

La lumbre de las máquinas incendiadas

Tomás Tenorio Galindo

La tardía aclaración del gobierno del estado sobre el carácter del ataque a las tres máquinas excavadoras en el libramiento de Tixtla —y su insistencia en que tal acción no fue obra de un grupo guerrillero sino de algún grupo de inconformes con la construcción de esa vía— ha sido insuficiente para disipar la primera impresión que la noticia causó en la opinión pública.

Quizás no había forma de impedir la creencia de que esa acción proviene de un grupo guerrillero, pues aun cuando se trata de un ataque de dimensiones reducidas, la forma en que fue realizado y el objetivo escogido corresponde al estilo de una guerrilla. Asimismo, la ausencia de víctimas colocaría al ataque en el mismo patrón de atentados que adoptó el año pasado el EPR. Contra fierros, no contra personas. Lo que no parece ser es lo que el gobierno dice que fue: una protesta de propietarios de tierras agraviados por el paso de la carretera.

Pero de todos modos fue el manejo que el gobierno dio a los hechos lo que alimentó el interés público sobre el acontecimiento y la presunción de que se trata de un ataque guerrillero. El nervioso hermetismo oficial (los hechos se conocieron tres días después de ocurridos) y el empeño del gobierno por descalificar la interpretación que los mismos trabajadores de la empresa constructora comunicaron a los medios, sólo tuvieron como efecto el reforzamiento de la idea original.

Mientras los responsables de la destrucción de las tres máquinas no reclamen su autoría, permanecerá como especulación que se trata de una acción guerrillera. Y mientras el gobierno no esclarezca los hechos, carecerá de base para negar una incursión guerrillera. Así pues, ¿es lo que parece o es lo que no parece?

Por encima de la controversia e incluso del esclarecimiento de los hechos, el ataque a las máquinas ha hecho florecer en el gobierno de Zeferino Torreblanca el temor ante la posibilidad del resurgimiento activo de grupos guerrilleros en el estado. De ahí el énfasis en negar que haya sido un ataque armado.

Sin embargo, contra los deseos y el esfuerzo del gobierno para apagar la lumbre, el incendio de Tixtla ha adquirido una importancia inesperada, acaso como un amenazante símbolo de lo que podría ocurrir en el futuro cercano en nuestro estado (¿y en el país?).

Los temores no son infundados. El renacimiento de la actividad guerrillera afectaría gravemente la estabilidad política y social de México y del estado, después de un periodo de relativa tranquilidad y, sobre todo, después del adormecimiento del EZLN en Chiapas. Además, cuestionaría al primer gobierno surgido de la alternancia política y pondría en serios aprietos al PRD.

Sin embargo, la realidad no se conjura mediante la negación de los hechos. Los atentados contra instalaciones de Pemex realizados el año pasado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que reclama al gobierno federal la presentación con vida de dos de sus integrantes presuntamente detenidos por agencias oficiales, situó al Estado mexicano de nuevo frente a la realidad de la guerrilla.

Con esos atentados, el EPR regresó a las acciones armadas al cabo de un largo ciclo de presencia testimonial, compartida por otras organizaciones como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP). Como ha contextualizado este diario, esas tres organizaciones han anticipado la realización de acciones armadas en contra de los gobiernos del presidente Felipe Calderón y del gobernador Zeferino Torreblanca.

Es a la luz de estos antecedentes que adquirió carta de verosimilitud la sospecha del ataque guerrillero en una de las obras carreteras favoritas del gobernador Torreblanca, pese a que en efecto pudo tratarse de otra cosa. Pero a lo anterior podríamos sumar la zozobra causada por el alza generalizada de precios en el país, así como la cercanía de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional y del centenario de la revolución de 1910, estos dos últimos elementos subjetivos que suministran una carga de identificación con los movimientos revolucionarios que les dieron origen.

Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal pueden ignorar la existencia de un clima de creciente inconformidad social, que fertiliza las manifestaciones armadas. Y si los malos augurios llegaran a cumplirse, la pregunta no es sólo qué hará el gobierno ante un desafío de semejante naturaleza, sino también qué hará el PRD. Por principio de cuentas, minimizar los hechos no es opción.

LEYVA MENA, CRÍTICO

Hace veinte años Marco Antonio Leyva Mena, el dirigente estatal del PRI, hacía sus pininos políticos, y hace treinta quizás usaba todavía uniforme de escuela. Pero ni su juventud justifica el cinismo con el que borró de un plumazo la marca de su partido en el destino del estado (y del país). Al criticar que “la falta de empleos ha profundizado los esquemas de pobreza en este estado y no tenemos hasta este momento una visión de un desarrollo equilibrado para el estado de Guerrero”, Leyva Mena olvidó que su partido, el PRI, gobernó aquí durante décadas. En todo ese tiempo el PRI nunca creó una “visión de desarrollo”, y la única riqueza que generó fue la que ahora disfrutan prominentes priístas que son ex gobernadores, ex senadores o ex dirigentes del partido.

tenorioga@hotmail.com